

Andalucía, 29 de abril de 2013

Intervención del presidente de la Junta en Forum Europa

Se ha dicho que la economía es una ciencia lúgubre. Me temo que no comparto ni el sustantivo ni el adjetivo. Lo que sí he podido comprobar, después de estos largos años de crisis, es que, en ninguna otra rama del conocimiento, anida tan intensamente el fundamentalismo como en la economía.

El no podemos hacer otra cosa del Presidente Rajoy; la persistencia en prescindir del análisis de los resultados de la política económica, o ese desprecio a las consecuencias sociales, las desigualdades que se están produciendo, son la manifestación de un fundamentalismo enormemente peligroso.

Cinco años después de su inicio, la crisis está provocando unos daños de tal envergadura que deberíamos ser capaces de sentarnos a analizar las cosas sin la pretensión de convertir nuestras ideas en dogmas, sin la pasión de la dialéctica electoral y con la empatía suficiente para darnos cuenta de que tanto sufrimiento y tanto malestar social exigen cambiar el rumbo. Aún estamos a tiempo.

La fatiga que ha provocado en nuestra sociedad la crisis no es solo la manifestación del sufrimiento de millones de hombres y mujeres que han perdido su empleo, que no pueden pagar sus deudas, que ven cómo se derrumban tantos y tantos proyectos, tantas y tantas ilusiones. Es, también, la desesperanza, el malestar social, el desarraigo, la desigualdad y la pobreza.

La fatiga de la crisis es la irrupción de Berlusconi o Beppe Grillo en Italia; Amanecer Dorado en Grecia; Viktor Orban en Hungría; los Verdaderos Finlandeses; los 6,5 millones de votos de Marine Le Pen en Francia; la crisis constitucional en Portugal; el corralito chipriota o la impugnación de las democracias representativas.



JUNTA DE ANDALUCIA

Y la fatiga de la crisis es, además, el hartazgo y el enfado de escuchar constantemente que estamos mejorando; oírlo además de fuentes oficiales el mismo día en que conocimos que habíamos sobrepasado con creces los seis millones de parados.

Este espejismo de la recuperación es una falta de respeto. Una falta absoluta de sensibilidad que nos lleva por el camino más recto al desprestigio de la política y al escepticismo.

Por eso me van a permitir que empiece por decirles que tan importante como recuperar la senda del crecimiento económico o el crédito financiero es recuperar el crédito de la política y el crédito institucional.

Ninguna empresa colectiva es viable cuando se rompe el lazo que une la voluntad de los representantes políticos con las de sus representados. Y hay que reconocer que este lazo está hoy muy debilitado. Es necesario volver a anudarlo de forma que los representantes sean sensibles con los sufrimientos, con los problemas o las ambiciones del pueblo y, al mismo tiempo, que los ciudadanos vean, y acierten a entender, la realidad desde los ojos y las explicaciones de sus representantes; de que conozcan las dificultades y puedan comprender que, a veces, hay que dar un paso atrás para luego dar dos hacia delante.

Naturalmente estoy hablando de fortalecer la voluntad colectiva desde el liderazgo político. De que la política no aparezca resignada. Porque estamos corriendo el riesgo de un desistimiento social y político de incalculables consecuencias para la estabilidad del país.

Lo peor que podríamos hacer en estos momentos sería dar saltos en el vacío, hacer tabla rasa e impugnar todo al mismo tiempo. Pero casi tan malo como esto sería obstinarnos en el error, mantener el rumbo actual y dejar que el tiempo se encargue de resolver los problemas, porque lo que empieza a faltar es, precisamente, tiempo.



JUNTA DE ANDALUCÍA

Es el momento de sumar, de entendernos, de fortalecer las instituciones y de volver a poner la economía al servicio de la democracia; es decir, de restablecer el valor de la política. La inmensa mayoría de los españoles de hoy no participaron en los grandes acuerdos políticos de la transición.

En aquel entonces se construyó una democracia en medio de una crisis durísima y con una economía ineficiente y arcaica. Y salimos de la crisis con la misma fórmula empleada para construir una democracia: acuerdos políticos e impulso público. Lejos de dejar que el tiempo y el mercado resolvieran por sí mismos los problemas, se tomaron decisiones políticas, se modernizó el país y se repartieron con equidad los costes de la crisis.

El consenso de la transición tuvo sus fundamentos más claros en los principios que inspiraron años antes el modelo social europeo, fruto de un pacto entre las distintas fuerzas políticas dominantes en la entonces Comunidad Económica Europea. El equilibrio entre Estado y mercado, entre libre empresa y distribución social de la riqueza, fue el responsable del mejor momento de la historia europea y fue además el que permitió, entre nosotros, el consenso constitucional de 1978 que vino a construir nuestro modelo de convivencia:

El modelo, permítanme la expresión, funcionó como un tiro. Su plena aplicación y su desarrollo más eficiente y más equitativo tuvo lugar hasta la crisis de principios de los 90. Como se ha encargado de poner de manifiesto el Primer Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas, de 2013, fue precisamente en los años 80 del pasado siglo cuando más se redujeron las desigualdades en España, cuando mayor fue la confianza de los ciudadanos en la política y cuando la adhesión al proyecto europeo fue más ilusionante.

Los gobiernos de entonces, las fuerzas políticas de aquellos años, tomaron decisiones económicas importantes, pero, sobre todo, las afrontaron desde la política; es decir, desde un compromiso con los ciudadanos. Se tomaron decisiones para que la salida



de la crisis se produjera mediante una modernización de la oferta productiva, el diálogo social y un reparto equitativo de los sacrificios.

Recuerdo que, en aquellos comienzos de la transición, casi una cuarta parte de nuestra población ocupada figuraba como empleo agrario, que el nivel formativo de la población activa era muy bajo, que habíamos perdido en la emigración más de un millón de trabajadores, que nuestras infraestructuras dejaban casi incomunicado a medio país, que la tasa de actividad femenina era la más baja de nuestro continente y que nuestra industria era vieja, obsoleta e ineficiente.

En esas circunstancias era imprescindible para salir de la crisis una modernización económica, pero también debía serlo, por nuestro pacto constitucional, un compromiso de lucha contra la desigualdad. Y eso es lo que se hizo de forma loable y eficaz: Baste recordar que el 40% de los empleos destruidos en aquella crisis lo fueron en el sector agrario, que se reconvirtió la industria, se liberalizó la economía y se crearon las condiciones para un país más abierto a la competencia. Pero que, además, salimos de la crisis con la construcción del primer edificio de un sistema educativo moderno e incluyente, público y universal, con un excelente sistema sanitario, con una protección más intensa del desempleo, con una política fiscal basada en la progresividad y con dialogo político, social y económico.

Recuerdo aquellos años, la última gran crisis anterior a la actual, sufrida por la economía española, no como un ejercicio de nostalgia sino para llegar a una triple invocación, imprescindible para los tiempos actuales:

La primera, que sólo desde la política y desde los compromisos colectivos se puede afrontar con éxito y con estabilidad social la salida de la crisis. Dejar que sean las propias fuerzas del mercado las que se hagan cargo de ello es condenarnos a la ruptura del modelo de convivencia y a un retroceso histórico. Con palabras de Dani Rodrik, “los mercados y los gobiernos se complementan, no se sustituyen. Si quieres mejores mercados necesitas tener más y mejor gobierno porque los mercados funcionan mejor no donde los



Estados son débiles sino donde son fuertes".

La segunda invocación que quiero hacer, tan importante como la primera, es que la crisis nos obliga también a modernizar la economía; a mejorar el capital humano y el capital tecnológico, a garantizar una competitividad dinámica. Limitarse a devaluar costes laborales y sociales para mejorar la competitividad es una opción más ideológica que económica y, además, una opción equivocada. Hay que reformar muchas cosas. Pero sin confundir reformas con recortes ni creernos tampoco que los ajustes presupuestarios nos obligan a recortar por igual todo el gasto público, sin priorizar funciones y objetivos.

Aun querría hacer una tercera invocación que, llegados al punto al que hemos llegado, me parece imprescindible: La persistencia de la crisis y su incidencia sobre una población fuertemente endeudada está llevando a nuestro país a un aumento de la exclusión social, a nuevas formas de pobreza, que nos obligan a tomar medidas de choque. Hablo de una Estrategia Nacional contra la Exclusión Social. De una protección de todos aquellos que se ven imposibilitados para salir de la espiral del paro, la precariedad laboral y el endeudamiento personal y familiar y a los que las formas tradicionales de protección o no les alcanza o resultan insuficientes para sus necesidades vitales.

La crisis nos ha interrumpido el proceso de modernización de nuestra oferta económica y esto es grave. Nos ha provocado también un aumento brutal del desempleo que es aún más grave. Y lo más acuciante es que ha agudizado la brecha de desigualdad que comenzó a abrirse en los años noventa.

Desde 1995 en que salimos de la breve crisis que se produjo como consecuencia de la II guerra del petróleo, hasta 2007, la economía española experimentó una tasa elevada de crecimiento y de creación de empleo. Pero lo más relevante de esta fase del crecimiento es que se produjo un aumento de las desigualdades. Y simultáneamente a todo ello se produjo un endeudamiento fortísimo, y sin precedentes, de las familias.

En 1995 la deuda de las familias equivalía al 31,5% del PIB. En 2009 el



JUNTA DE ANDALUCÍA

endeudamiento era ya del 86,5% del PIB. Había crecido en casi 770.000 millones de euros. El patrimonio de los españoles creció en ese periodo de tiempo ocho veces más que sus rentas.

Así las cosas, la llegada de la crisis, que está siendo brutal en sus efectos sobre el empleo, ha incidido además, en esta ocasión, sobre unas familias fuertemente endeudadas.

Las consecuencias, cinco años después, son ya lo suficientemente graves como para seguir con la cantinela de la herencia recibida. Llevamos 16 meses de gobierno del Partido Popular y las cosas, lejos de haber mejorado, están peor que antes de su llegada. 16 meses en que el discurso político del gobierno ha sido el de la herencia recibida y la imposibilidad de abordar otro camino distinto.

La crisis ha provocado, en apenas 5 años, la destrucción de casi 4 millones de empleos. Pues bien, 1.173.000 de los empleos destruidos se ha producido en estos 16 meses de gobierno de Rajoy. En los dos últimos años de gobierno de ZP, entre 2010 y 2011, se habían destruido 842.000. Es decir, que se ha pasado de una destrucción de 1.154 empleos diarios con Zapatero a la destrucción de 2.600 cada día de gobierno de Mariano Rajoy. Añadamos a esto que, en 2012, con la reforma laboral la remuneración de los asalariados disminuyó en 27.582 millones de euros cuando en los dos años inmediatamente anteriores había crecido en 4.500 millones.

Como ha dicho Felipe González, empieza a ser hora de considerar que el actual gobierno ya es heredero de sí mismo. La brutal subida del paro en estos últimos dieciséis meses no es la herencia del pasado, tampoco es consecuencia exclusivamente del Gobierno de Rajoy. Es consecuencia de la crisis y de la forma en que se está afrontando.

No pretendo utilizar el desempleo como garrote político. Me limito a decir que ya es hora de que el gobierno empiece a asumir su propia responsabilidad, tome conciencia del problema y salga de la obstinación de pensar que la sola consolidación fiscal nos va a sacar de ésta. Porque ni siquiera este objetivo lo está consiguiendo.



En 2012, según los datos del Banco de España, el déficit público pasó del 9,4 del año anterior al 10,6%. Y mientras las CCAA lo redujeron sustancialmente, el Estado, aun descontando el coste de la llamada reforma financiera (que no sé por qué habría que descontarlo), lo aumentó. Incluso este año el Estado se ha vuelto a fijar el mismo objetivo de déficit con el que cerró 2012, mientras que las CCAA deberán recortar 6.300 millones de euros.

Es decir, crece el paro y no se rebaja el déficit del Estado, a pesar de haberse aumentado la presión fiscal, porque el aumento del desempleo ha reducido los ingresos e impedido la consolidación fiscal.

¿Hasta qué número de parados hemos de llegar para darnos cuenta de que el diagnóstico y el tratamiento de la crisis están equivocados?

En la actualidad hay 2.500.000 de cabezas de familia en situación de desempleo. Tres millones y medio de parados lo son de larga duración. Casi 2,5 millones de personas se consideran ocupados subempleados y, como dije antes, se está produciendo un desgarramiento de los sistemas clásicos de protección social que no están siendo capaces de solucionar las nuevas situaciones de necesidad, mientras que la red informal de protección que ha sido siempre la familia tampoco en esta ocasión está teniendo su efecto amortiguador de otras épocas, dado que el 80% de los empleos destruidos eran ocupados por cabezas de familia.

La crisis está teniendo, además, una incidencia superior a la de las crisis anteriores en las clases medias, no sólo por la pérdida de empleo sino porque la reducción de las rentas familiares está dificultando que puedan afrontar sus responsabilidades de pago.

El semblante de la crisis actual no tiene precedentes reproducibles en otras fases históricas recientes. Tiene un rostro muy distinto.

Cuando desde la Junta de Andalucía hemos informado de algunas de las decisiones



JUNTA DE ANDALUCÍA

que mañana adoptará el consejo de gobierno se han podido escuchar muchos disparates, Etiopía incluida. Pero lo que más me ha impresionado, en esta escalada de despropósitos, es comprobar que la política puede conducir a muchos a ocultar la realidad más lacerante por miedo a tener que reconocer que hay pobreza, hay exclusión social y hay desigualdades que humillan a una sociedad que se considera avanzada. Pero haberlas, haylas. Y no solo en Andalucía. Las hay también aquí mismo, en Madrid; y las hay en muchas de las sociedades más opulentas del mundo.

Es imprescindible situar el aumento de las desigualdades en el centro del debate político.

En estos momentos, en circunstancias como las actuales, en que la propia Unicef España nos dice que el 26% de los niños de nuestro país está en riesgo de pobreza; en que familias de la clase media están acudiendo al banco de alimentos; en que muchas personas pueden perder su vivienda y a pesar de todo tener que seguir pagando por ella; y en que las entidades financieras han supuesto para España casi un 4% del PIB de déficit público; hemos de afrontar entre todos, con imaginación y con grandes pactos nacionales un camino solidario y eficaz de salida de la crisis.

El viernes debería haber comparecido el Presidente Rajoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Salieron, en su lugar, los responsables de la economía; mejor dicho, los dos responsables de las Finanzas que tenemos, para decirnos que no saldríamos de ésta hasta dentro de tres años. Y millones de españoles y españolas miraron atónitos a la pantalla del televisor con la angustia de saber que no pueden esperar tanto tiempo.

Ni la desindexación, ni la recapitalización de las entidades de crédito a costa del contribuyente; ni la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal les van a solucionar sus problemas, como no han hecho otra cosa que agravarlos la reforma laboral; los recortes de la protección social o los reiterados aumentos de los impuestos.



Hace poco más de un mes los socialistas propusimos en el Congreso un “diálogo para acordar políticas de crecimiento, para defenderlas conjuntamente en Europa; para financiar nuestros servicios públicos básicos, educación y sanidad; para mejorar la eficacia de nuestras instituciones; un diálogo sobre la reforma laboral en la aún estamos a tiempo de corregir errores. Diálogo sobre la reforma financiera para que vuelva el crédito y para poder asegurar a los ciudadanos que las ayudas a la banca se devuelven”. La oferta no encontró respuesta en el banco azul.

Sé que cansa la arrogancia de un gobierno autista que no es capaz de dar la cara y explicar su política sin tener que apelar al ataque contra los socialistas. Y, sin embargo, creo que es necesario insistir para conseguir encontrar un camino que acorte los plazos, que sea más eficaz, y más solidario. Como dijo Rubalcaba, “Si quiere diálogo, aquí nos tiene. Creemos que España lo necesita”. Un diálogo que, en mi opinión, debería concentrarse en cuatro grandes objetivos.

El primero de todos, el empleo. Un pacto por el empleo que incluya una política europea que priorice el crecimiento económico y una política del euro que establezca también objetivos compartidos para una estabilidad compatible con la reactivación de la economía. No es posible seguir la senda actual de constantes ajustes, recortes y desempleo. No es comprensible que el Comisario de Economía, el Sr. Rhen, después de llegar a 6 millones de desempleados, diga que se persevere en la idea de que el único camino es el ajuste fiscal.

En segundo lugar, una apuesta clara por la modernización de la economía que no consiste en desplomar los costes laborales y deprimir la negociación colectiva o en atacar a los sindicatos, sino en invertir en educación, investigación, innovación, sostenibilidad de los recursos, internacionalización, reforma fiscal y una mayor eficiencia de las distintas AAPP para garantizar la unidad de mercado y apoyar el emprendimiento. Es más, sería importante conseguir una especie de Golden Rule para el gasto en I+D+i, de forma que este gasto no compute, o no lo haga íntegramente, en el déficit.



En tercer lugar, un gran pacto para la consolidación del modelo de protección social que no es, en este caso, un ajuste coyuntural. No estamos aquí ante un problema de ingresos sino de gasto y, consecuentemente, se necesita un compromiso. La crisis no es razón para destruir el sistema de protección social. Es la propia viabilidad del sistema la que determinará los ajustes a hacer.

Y, por último, una Estrategia Nacional contra la Exclusión Social, que active una protección de todos aquellos a los que la pérdida de ingresos y el endeudamiento les están llevando a situaciones de marginación y desarraigo y que, a la vez, mejore la posición jurídica de los deudores más vulnerables, como los hipotecarios, los consumidores de productos financieros, los asalariados y los autónomos y pymes.

Sé que puede resultar un gesto retórico insistir en algo que se ve como imposible por la cerrazón del gobierno; por su soberbia a aceptar que otros pueden aportar soluciones o, lo que es peor, porque aceptar el diálogo arruinaría su irresponsable excusa de la herencia recibida. Pero creo importante insistir, porque es fundamental conseguirlo.

Hay salida si somos capaces no solo de hacer cosas diferentes sino también de hacerlas de forma diferente.

El espíritu que debe alentar estos momentos críticos es lo que Jorge Luis Borges llamó el deber de la esperanza. Algo incompatible con las palabras huecas o con el escamoteo de las propias responsabilidades y que debe traducirse en iniciativas políticas y sociales.

Por eso hay que convocar a todos. Este es un momento en el que hay que jugársela.

Piensa el Señor Rajoy que no haciendo nada más que esperar será suficiente. Se equivoca y con su equivocación pasará a ser el único responsable de la destrucción de cientos de miles de esperanzas. Esa será su herencia. Si el Sr. Rajoy puede esperar, los



JUNTA DE ANDALUCIA

españoles, la mayoría de los españoles, no pueden.

